

Sentencia No. 028-98 Tribunal Aduanero Nacional, a las 9 horas 34 minutos del día 1 de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el agente aduanero Oscar Calvo Corrales en representación de la Agencia de Aduanas Aeromar S.A. contra la resolución RES-DCF-0141-98 de las nueve horas cero minutos del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Lic. Gerardo Bolaños Alvarado en su condición de Director General de Aduanas.

RESULTANDO

I Que la Agencia de Aduanas Aeromar S.A. informó a la Dirección General Aduanas a través de escrito de fecha de recibido cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete que las mercancías de la partida 20 02 90 90 10 originarias de Panamá y amparadas al Tratado Bilateral de Libre Comercio suscrito con ese país, tiene una tarifa diferente al establecido en el Sistema Informático dado por el Servicio Aduanero Nacional. (Folio 1 del expediente administrativo).

II Que a través de resolución número APC-029-98 de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho la Aduana de Paso Canoas inicia procedimiento administrativo tendiente a investigar presunta omisión del DAI en el cálculo de varias importaciones realizadas por la empresa NESTLE y tramitadas por AEROMAR S.A. (Folio 141 a 143 expediente administrativo).

III Que con escrito fecha de presentación veinte de febrero del año en curso AEROMAR S.A. se apersona en tiempo a contestar y presentar alegatos y pruebas (Folio 144 a 150 expediente administrativo).

IV Que la Aduana de Paso Canoas confirmó el adeudo y modificó la obligación tributaria de diversas declaraciones cobrando la suma de C. 3.144.869,08 en resolución número G-APC-075-98 de las 16 horas con 10 minutos del 2 de marzo de 1998.(Folio 151 a 155 expediente administrativo).

V Que el afectado interpuso recurso de reconsideración y revisión jerárquica y concomitantemente incidente de nulidad absoluta con suspensión de la ejecución del acto contra la citada resolución en escrito de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho. (Folio 156 al 161 del expediente administrativo).

VI Que la Aduana de Paso Canoas rechazó el citado recurso en resolución G-APC-087-98 de las 8 horas y 50 minutos del once de marzo de 1998 y aceptó el de revisión jerárquica (Folios 162 a 164 del expediente administrativo).

VII Que el afectado se apersonó en tiempo ante la Dirección General de Aduanas a través de oficio RVJ-03-98 de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho (Folio 166 del expediente administrativo).

VIII Que la Dirección General de Aduanas en resolución RES-DCF-041-98 de las nueve horas cero minutos declaró sin lugar el recurso de revisión jerárquica (Folios 167 a 172 del expediente administrativo).

IX Que el recurrente interpuso recurso de apelación en escrito de fecha veintiuno de abril del año en curso (Folio 173 del expediente administrativo)el cual fue admitido por la Dirección General de Aduanas a través de la resolución DCF 166-98 de las 9 horas del 18 de mayo de 1998 emplazando al interesado.(Folios 174 y 175 expediente administrativo).

X Que el apelante se apersonó en tiempo ante este Tribunal a través de escrito de fecha cuatro de junio del año en curso (Folio 177 a 181 del expediente administrativo).

XI Que el recurrente fundamenta sus alegatos y pretensiones en: a) Se declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta por haberse violado las reglas mínimas del debido proceso y de defensa al no haber valorado la Aduana y la Dirección las pruebas y argumentos, notificándose resoluciones con anterioridad a su emisión y firma y no haberse notificado a todas las partes. b) En virtud de los principios de celeridad y eficiencia en el procedimiento las pruebas sean evacuadas en el Tribunal Aduanero Nacional. c) El artículo 14 del CAUCA II requiere que se establezca primero la responsabilidad de quien o quienes fueron los funcionarios que introdujeron datos errados en el Sistema Informático Aduanero para luego excepcionalmente trasladar esa responsabilidad a los beneficiados que en el presente asunto son los consumidores. d) Apelan al principio de seguridad jurídica por actuar apegados al Sistema Informático Aduanero, teniendo en cuenta que fue la Agencia quien informó a la Dirección General de Aduanas sobre los errores del mismo en base a los artículos 30 y 36 a) de la Ley General de Aduanas. e) El artículo 16 de la LGA establece la responsabilidad de los funcionarios sin mencionar los ajustes que son inconstitucionales por cuanto existiría un traslado de responsabilidad. f) No fue el administrado el que dejó de pagar sino la Aduana la que dejó de cobrar con base a los sistemas informáticos que son de aplicación obligatoria cuyos diskettes son entregados a los operadores económicos y cuyos datos los ha inducido a error. g) Se inicie procedimiento tendiente a ubicar los funcionarios responsables de las irregularidades estableciendo sus responsabilidades en virtud de lo establecido en el Artículo 106 de la Ley General Aduanas. h) Solicita una audiencia oral y privada ante este Tribunal.

XII Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.

Redacta la Licenciada Rodríguez Muñoz; y

Considerando

I Las competencias del Tribunal Aduanero Nacional están reguladas en el Título IX, capítulo único de la Ley General de Aduanas, en adelante LGA, los recursos y los actos dictados por la Aduanas y la Dirección General de Aduanas se regulan en los Artículos 203 y 204 de la supra citada ley.

El fondo del presente asunto se refiere al cobro efectuado a un agente aduanero producto de la revisión y modificación de la determinación de la obligación tributaria aduanera por el no pago del DAI. Las normas que regulan el ejercicio del control a posteriori, las atribuciones de la administración aduanera, la revisión de la determinación así como la rectificación de la declaración son los artículos 23, 24, 59, 62 y 90 de la L.G.A. y las referentes al agente aduanero son los artículos 94 y siguientes del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, en adelante CAUCA II, los artículos 33 y siguientes de la L.G.A., los numerales 28 y siguientes del mismo cuerpo de ley que se refieren a las disposiciones generales de los auxiliares de la función pública. La normativa aplicable al procedimiento ordinario que debe seguir la autoridad aduanera para dictar decisiones o actos con efectos externos para los administrados son los artículos 192 y siguientes de la L.G.A. en concordancia con el 520 y siguientes de su Reglamento, en adelante R., así como las disposiciones sobre el procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP, de aplicación supletoria en caso de ausencia de norma expresa en la legislación aduanera.

II Por ser de previo y especial pronunciamiento de conformidad con el mandato establecido en el artículo 195 LGA, se entrarán a revisar los alegatos del apelante en relación con la nulidad de lo actuado. El afectado en primer término indica que ni la Aduana ni la Dirección General de Aduanas valoraron las pruebas y argumentos, notificándole resoluciones con anterioridad a su emisión y firma y no habiéndose notificado a todas las partes. A efecto de observar si efectivamente se cometieron tales vicios en el acto administrativo que determinen su invalidez por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, procederemos a revisar si el mismo se ajusta o no a las disposiciones reguladas por la legislación aduanera.

III El Servicio Nacional de Aduanas para modificar la determinación de la obligación tributaria aduanera debe hacerlo dentro del plazo de 4 años contados a partir del día siguiente de la fecha en que se efectuó el pago, exigiendo la cancelación de los tributos que se han dejado de percibir. En razón de que este acto evidentemente afecta derechos subjetivos o intereses legítimos está obligada a cumplir las reglas establecidas por la propia legislación aduanera referentes al procedimiento ordinario.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 incisos a) y b) de la LGA, la apertura del citado procedimiento ya sea de oficio o a instancia de parte, debe ser notificada a las personas o entidades afectadas y otorgarles un plazo de 15 días hábiles para presentar los alegatos y pruebas respectivas, lo cual fue cumplido tanto por la Administración Activa a través de la emisión de la resolución APC-DT-029-98 cuya notificación se efectuó el 2 de febrero del año en curso, como por el recurrente al haber presentado en tiempo sus alegatos y pruebas en escrito de fecha 20 de febrero. Al respecto debe observarse que la prueba documental como la testimonial ofrecida en el mismo tenían por objeto precisamente dejar establecido que el sistema informático oficial contenía un error al omitir el cobro del DAI por lo que la Agencia Aeromar actuó conforme a derecho al aplicar el citado sistema.

Cumplidas las etapas procesales señaladas lo procedente era valorar las pruebas a efectos de admitirlas y evacuarlas (practicarlas) o bien rechazarlas. No obstante, advierte este Tribunal que la Aduana de Paso Canoas emitió sin más trámite el acto final al dictar la res G-APC 075-98 en la cual entró a conocer el referido escrito de alegatos y pruebas, prescindiendo de hecho de toda la prueba al reconocer el Gerente de la Aduana que: “Sobre el particular es claro que el pago se dejó de efectuar por error en el sistema informático...” sin consignar su rechazo expresamente en la citada resolución. Es claro en consecuencia, que la Aduana de Paso Canoas no cumplió con lo establecido en la normativa aduanera al omitir una formalidad sustancial del procedimiento establecido en el Reglamento de la L.G.A. que señala en el artículo 528 la obligatoriedad y el plazo para el órgano instructor de evacuar la prueba, la cual en el caso concreto debía efectuarla dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la finalización del período de presentación de pruebas, esto es, en el período comprendido desde el 24 de febrero hasta el 16 de marzo inclusive del año en curso.

Por otra parte, si consideraba que la misma debía rechazarse, tendría que haber demostrado que se han dado en la especie, alguno de los supuestos indicados en el artículo 530 R. que literalmente indica: “El órgano instructor podrá rechazar las pruebas ofrecidas por la parte cuando resulten impertinentes, no conduzcan a probar algún elemento trascendente del asunto que se conoce o sean hechos públicos y notorios.”

En tal caso, debió emitir la resolución correspondiente, contra la cual el afectado hubiese tenido el derecho de interponer los respectivos recursos ordinarios de conformidad con lo establecido por los artículos 520 R. (que nos remite en forma obligatoria a las disposiciones de la LGAP sobre el procedimiento administrativo en caso de ausencia de norma expresa) y 342 y 345 LGAP de aplicación supletoria en el presente caso, los cuales estipulan respectivamente el derecho de las partes de recurrir contra las resoluciones de mero trámite, incidentales o finales en los supuestos establecidos en la ley y el derecho en el procedimiento ordinario de interponer recursos ordinarios contra el acto que deniega la prueba.

Por último, listo el asunto para resolver, debe proceder el órgano instructor a dictar el acto final dentro de los 10 días hábiles siguientes (Arts 196 d) y 532 R) siendo uno de sus requisitos de conformidad con el artículo 522 inciso b) del Reglamento la indicación expresa de la apreciación de las pruebas, los motivos de aceptación o rechazo y de las defensas legales, requisito que no fue cumplido en la res APC 075-98 según ya se ha indicado. Nótese que en el Por Tanto únicamente se resuelve rechazar la petición del recurrente en virtud de la improcedencia de los alegatos, sin apreciar la prueba, no indicándose por parte del Gerente de la Aduana de Paso Canoas, su juicio acerca de la autenticidad y eficacia de las mismas y sin ninguna mención a su aceptación o rechazo.

IV La doctrina ha sido conteste en definir el concepto y fin del procedimiento administrativo entendiendo como tal “ el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer y de los hechos que la crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión que mejor armonice con el fin publico a cumplir.” (Ortiz, Ortiz Eduardo. Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de Administración Pública. Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo).

Por su parte la L.G.A.P. al regular los diferentes tipos de nulidad de los actos disconformes con el ordenamiento jurídico los diferencia según la gravedad de la violación cometida indicando que en caso de duda sobre la existencia o calificación del vicio debe mantenerse el acto en virtud del principio de conservación del mismo. Establece en el artículo 166 que habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente y en el numeral 167 que será relativa cuando el acto sea imperfecto en uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta.

En lo referente a nulidades por vicio en el procedimiento establece en el numeral 223:

“1 Solo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento.

2 Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”.-

V En consecuencia son de recibo los argumentos del recurrente al manifestar que hubo vicios en la emisión la resolución G-APC-075-98 antes indicada , la cual ha criterio de este Tribunal es absolutamente nula en virtud de que es irregular por disconformidad del procedimiento con el Reglamento a la Ley General de Aduanas en los términos antes indicados, por omitir formalidades sustanciales al no evacuarse o rechazarse la prueba, ni consignar su apreciación en forma razonada y motivada, indicando claramente las razones de su aceptación o rechazo en la resolución G APC-075-98 de repetida cita, lesionándose los principios de legalidad y debido proceso contenidos en los numerales 11 y 39 de la LGAP y Constitución Política respectivamente.

Lo anterior en virtud de que estamos frente a un procedimiento limitador de derechos subjetivos, sancionador, el cual debe contener todas las garantías constitucionales de defensa, cuyo contenido básico está vinculado a la admisión de las pruebas pertinente para que el apelante pueda ejercer su defensa, o bien al rechazo de la misma de conformidad con los supuestos establecidos en la ley y en todo caso tales circunstancias deben ser debidamente comunicadas al afectado en el momento procesal oportuno, a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa.

VI De acuerdo a lo expuesto, fundamento legal indicado y a la pretensión del apelante, lo que procede es declarar la nulidad absoluta de la resolución G APC-075-98 retrotrayendo los efectos del acto al dictado de la misma para que el órgano a quo enderece el procedimiento , no siendo procedente acceder a lo solicitado por el recurrente evacuando este Tribunal la prueba ofrecida conforme a los principios de celeridad y eficiencia en razón de que estaría sustituyendo a la Administración Activa. Por innecesario no se entran a conocer los demás argumentos del apelante ni se concede la audiencia solicitada.

POR TANTO

Este Tribunal de conformidad con el artículo 91 del Código Uniforme Centroamericano II, 198 y siguientes de la Ley General de Aduanas, 158 166 y 169 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública resuelve: declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por existir nulidad en el procedimiento y en consecuencia se anula todo lo actuado hasta la resolución G APC-075-98 de las dieciséis horas con diez minutos del dos de marzo de 1998 inclusive. Se devuelve el expediente administrativo a la oficina de origen para lo correspondiente.

Notifíquese a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales y al señor Oscar Calvo Corrales en la Agencia de Aduanas Abromar S.A.

Licda. Loretta Rodríguez Muñoz
Presidenta

Lic. Desiderio Soto Sequeira

Licda. Alejandra Céspedes Zamora

Licda. Shirley Eug. Contreras Briceño

Lic. Dick Reyes Vargas

Lic. Elizabeth Barrantes Coto

Lic. Luis Gómez Sánchez